

Argentina 2003: hay espacio para el optimismo

Por Domingo F. Cavallo¹
Columbia University, New York
12 de marzo de 2003

Para encontrar la solución a los dramáticos problemas económicos y sociales, la Argentina debe encarar un profundo cambio en su sistema político, con especial énfasis en el rol y el poder de los líderes provinciales y en la reforma de las burocracias provinciales.

El sistema político de la Argentina ha padecido desde 1930 del exceso de poder de las corporaciones, especialmente de los grandes monopolios tanto públicas como privadas, y de las organizaciones sindicales. También, las Fuerzas Armadas se comportaron como una corporación y tuvieron una fuerte influencia. La crisis económica de principios de los años '80 y la Guerra de las Malvinas diluyeron el poder de los militares y las instituciones democráticas de la Argentina revivieron en 1983.

El Presidente Raúl Alfonsín fue elegido para reconstruir la democracia a partir de su denuncia del complot entre las grandes corporaciones, los sindicatos y las Fuerzas Armadas para usar al peronismo como manera de controlar el poder político. Pero su empeño sucumbió cuando decidió llegar a un acuerdo con los principales sindicalistas para crear el llamado Tercer Movimiento Histórico antes de las elecciones provinciales y legislativas de 1987. El pretendía reproducir las organizaciones políticas de masas de Hipólito Yrigoyen y de Juan D. Perón.

Carlos Menem ganó en las internas justicialistas en 1988 debido a su carisma y a su llegada a las bases populares mientras la mayoría de los gobernadores provinciales, las grandes corporaciones y los líderes sindicales apoyaban a Antonio Cafiero. Cuando Menem fue electo Presidente por primera vez en 1989, la mayoría de la gente esperaba que eliminase la hiperinflación y recreara el crecimiento de la economía. Durante su primer mandato logró la estabilidad monetaria y el crecimiento económico porque utilizó su poder para disminuir la influencia de las grandes corporaciones públicas y privadas y de los sindicatos. También logró imponer disciplina en la mayoría de las provincias.

Pero cuando Menem decidió aspirar a un segundo mandato, que la Constitución vigente no permitía, comenzó las negociaciones con Alfonsín para lograr la reforma.

¹ Conferencia pronunciada en School of Law, Columbia University, New York, 12 de marzo de 2003.

constitucional. Logró la modificación que le permitiera competir por un segundo mandato en 1995, pero para ello tuvo que aceptar la propuesta de Alfonsín de reducir el poder de la Presidencia de la Nación para aumentar el poder de los Gobiernos Provinciales y del Senado.

A mitad de su segundo mandato Menem decidió ser el candidato justicialista para un tercer mandato consecutivo pero se tropezó con dos grandes obstáculos: por un lado su ex- Vicepresidente y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde también quería ser el candidato peronista en las elecciones de 1999 y por otro la Constitución le impedía postularse nuevamente.

Mientras Duhalde trataba de lograr apoyo popular gastando mucho dinero en la Provincia de Buenos Aires a través de préstamos del Banco de la Provincia, Menem ayudaba económicamente a gobernadores de otras provincias a cambio de apoyo para imponer su candidatura. Al mismo tiempo, y con el afán de obtener el apoyo de los sindicalistas, Menem y Duhalde competían entre sí ofreciendo a los líderes sindicales mayor poder político y económico.

Como resultado final ni Menem ni Duhalde fueron electos, pero los tradicionales líderes sindicales así como los líderes y las burocracias provinciales incrementaron significativamente su poder.

Fernando De la Rúa fue elegido Presidente en 1999 porque sus partidarios lo veían como un verdadero demócrata y como un líder honesto capaz de sanear el sistema político de los vicios que se hicieron muy evidentes durante el segundo mandato de Menem, pero no logró consolidar el suficiente poder presidencial como para imponer disciplina en las provincias y en los sindicatos.

A su vez, los sindicatos lograron transformar la discusión de la ley de reforma laboral en un escándalo institucional basado en la sospecha de sobornos pagados a los senadores por miembros del gobierno de De la Rúa.

Los principales gobernadores provinciales, incluyendo aquellos del mismo partido que el Presidente, continuaron endeudándose con los bancos a tasas de interés cada vez más altas hasta llegar al punto de perder el crédito. Lamentablemente, hacia julio de 2001 el Gobierno Nacional había perdido el crédito y la Argentina fue forzada a comprometerse a llegar al Déficit Cero y a iniciar la reestructuración de la deuda.

En el segundo semestre de 2001, las grandes corporaciones privadas, las provincias y los sindicatos comenzaron a trabajar juntos para lograr un gran recorte automático de la deuda provincial y del sector privado. Ellos fueron alentados por la propuesta del default inducida por los "recortes de deuda" que hacían economistas estadounidenses muy conservadores como Alan Meltzer y sus colegas de la Comisión Meltzer. Duhalde, Alfonsín y un gran multimedios argentino pensaron que con la pesificación, la devaluación y el default lograrían aquel objetivo. Buscando una oportunidad para llevar

a cabo sus intenciones, todos ellos contribuyeron al Golpe Institucional de los días 19 y 20 de Diciembre de 2001.

Las provincias y las grandes corporaciones privadas lograron diluir sus problemas de endeudamiento a través del caos, pero el pueblo argentino sufrió un recorte del 30% de sus ingresos reales y la deuda del Estado Nacional se incrementó en 20.000 millones de dólares como consecuencia de la compensación pagada a los bancos por la pesificación asimétrica.

El futuro parece sombrío a no ser que las próximas elecciones generen un fuerte liderazgo nacional, un significativo cambio en la calidad y el estilo de los líderes provinciales y con una relación fiscal totalmente nueva entre el Gobierno Nacional y las provincias.

Hasta hoy a la mañana yo no era muy optimista. Los escándalos en las internas del Partido Radical y la inexistencia de internas en el Partido Justicialista sugieren que en lugar de mejorar, la política argentina parecería retroceder fuertemente. Tuve la misma impresión a través de los escándalos que se produjeron en la provincia Catamarca y la consecuente suspensión de las elecciones.

Pero esta mañana leí en los diarios argentinos que el Senado decidiría expulsar al Senador Barrionuevo la semana próxima, puesto que los senadores vinculados a los tres candidatos presidenciales peronistas acompañarían con sus votos a los representantes de la oposición para declarar al Senador Barrionuevo “moralmente incapacitado” para continuar siendo miembro del Congreso argentino ¡Éstas son muy buenas noticias!

Para entender los motivos por los que le atribuyo tanta importancia a esta información es necesario explicar qué representa Barrionuevo en la política argentina y cómo se ha comportado recientemente. Es uno de los integrantes más conspicuos de una red política oculta que jugó el mismo papel en la Argentina que Vladimiro Montesinos en Perú.

Barrionuevo es un líder sindical que durante el último cuarto de siglo ha administrado grandes cantidades de dinero provenientes de los aportes de los trabajadores al sistema de salud y muy a menudo ha tenido acceso a fondos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Construyó su poder con la utilización de este dinero y con su participación como principal mediador en todos los acuerdos políticos descriptos anteriormente.

En 1987 fue el principal artífice del acuerdo entre los sindicatos y Alfonsín que destruyó el gobierno este último. Fue también uno de los negociadores clave en el acuerdo entre Menem y Alfonsín para reformar la Constitución en 1994 que le permitió a Menem ser reelecto pero a costa del debilitamiento del poder presidencial y el aumento del poder de las provincias.

Fue un activo participante a la hora de apoyar a Menem en su lucha contra Duhalde durante la competencia por la candidatura presidencial del Partido Peronista en 1999.

También participó activamente en las negociaciones que generaron el escándalo en el Senado relacionado con la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de De la Rúa en el año 2000. Durante el golpe institucional de diciembre del 2001 fue una de las personas clave en posibilitar el diálogo entre Duhalde, Alfonsín, las grandes corporaciones y los sindicatos que resultaron en la renuncia de De la Rúa.

Más recientemente, ha sido un gran apoyo de Duhalde en su lucha contra Menem para impedir la realización de las elecciones internas en el Partido Peronista, elecciones que, según las encuestas, Menem hubiera ganado.

Su esposa es Ministro de Trabajo del gobierno de Duhalde. Este año Barrionuevo decidió postularse como candidato a gobernador en la provincia de Catamarca. Al no cumplir con el requisito de residencia en dicha provincia establecido en la Constitución provincial, la Suprema Corte de Catamarca declaró inválida su candidatura. En lugar de permitir que otra persona de su partido fuera candidata, Barrionuevo decidió boicotear las elecciones organizando una revuelta y quemando las urnas. Las elecciones debieron ser suspendidas a pocas horas de haber dado comienzo.

Una gran mayoría de argentinos interpretaron este acontecimiento como el ejemplo más reciente y claro de la “mala política”, y la política tiene que cambiar si la Argentina desea un gobierno bueno y honesto. Pero el Presidente, el Ministro del Interior y la mayoría de los miembros del gobierno de Duhalde eligieron culpar a las autoridades locales por el escándalo en Catamarca, en lugar de culpar a Barrionuevo.

Afortunadamente, las noticias en los diarios de hoy indican que ninguno de los candidatos presidenciales, incluyendo a Néstor Kirchner, quien es el candidato apoyado por Duhalde, tendrán la misma actitud que el Presidente y sus ministros. En cambio, parece que censurarán el mal comportamiento de Barrionuevo y lo expulsarán del Senado. Si esto sucediera, deberíamos ser más optimistas con relación al futuro de la Argentina.

Sólo si el presidente electo el 27 de abril utiliza las semanas iniciales de su gobierno para promover una inmediata reforma política que permita la total renovación de los gobiernos provinciales y municipales y de los miembros del Congreso Nacional, será posible vislumbrar una solución para la tragedia económica y social de la Argentina.

Este tipo de reformas debería otorgar el poder a políticos deseosos de trabajar en conjunto para reconstruir el poder del Gobierno Nacional, reformar las provincias y establecer renovadas relaciones fiscales entre ambos niveles del Gobierno.

El Gobierno Nacional deberá reconstruir las instituciones fiscales y monetarias para que los argentinos vuelvan a confiar en que el sistema económico y legal asegurará sus derechos de propiedad. Se requerirá una reforma impositiva que refuerce el impuesto a las ganancias y que elimine impuestos sobre las exportaciones y los sueldos. Los argentinos deberán recuperar la capacidad de elegir la moneda que en el pasado los

ayudó a sentirse seguros de que ninguna política monetaria sería utilizada para dictar impuestos sobre su capital financiero.

Los gobiernos provinciales deberán mejorar el manejo de sus recursos y concentrar sus esfuerzos en proveer educación, salud y seguridad a la población, particularmente a los más pobres. También deberán evitar endeudarse con créditos irresponsables. Una reforma impositiva debería conceder a los gobiernos provinciales la posibilidad de recaudar sus propios impuestos y se reduciría para reducir considerablemente la dimensión de los fondos coparticipables del sistema impositivo nacional.

La reducción a la mitad de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la devolución a las provincias de la autoridad para determinar impuestos sobre ventas finales de bienes de consumo ayudarían a incrementar la competitividad de las exportaciones y al mismo tiempo mejorarían la responsabilidad fiscal de los gobiernos locales.

Pero ninguna de éstas u otras reformas económicas serán creíbles ni devolverán la confianza a menos que el nuevo liderazgo las implemente con convicción y determinación e impida la corrupción política y económica que durante las últimas décadas generó la actual tragedia argentina.